

Boletín Oficial

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DEL
BOLETIN OFICIAL E
IMPRENTAS

LEYES . DECRETOS . RESOLUCIONES
DISPOSICIONES MINISTERIALES
LICITACIONES

AÑO LXVI

Buenos Aires, lunes 4 de agosto de 1958

Número 18.704

NO PODRA SER CONFIRMADA, MODIFICADA O REVOCADA POR EL PODER EJECUTIVO UNA RESOLUCION DE LA CAMARA DE ALQUILERES

DECRETO Nº 2.774. — Bs. As., 24/7/58.
VISTO este expediente Nº 45.042/54, y CONSIDERANDO: Que don Nicanor Ramón Basilio Vidal Roca por sí y en representación de "Gran Rex" Sociedad de Responsabilidad Limitada, deduce recurso jerárquico contra la resolución de la Cámara de Alquileres Nº 28.403, de fecha diciembre 9 de 1953, que ratifica la Nº 26.126, dictada por dicho

Organismo en fecha junio 10 de ese mismo año; Que por Resolución 26.126/53 se desconoció y rechazó, por considerarlo simulado, a los efectos de la fijación del valor locativo correspondiente, el contrato de locación del inmueble situado en la calle Bartolomé Mitre Nros. 2450/60 de esta Capital, celebrado en abril 29 de 1950 entre "Gran Rex" S. R. L., como locadora y

el doctor Osvaldo José Nusdeo como locatario; se revocaron las anteriores resoluciones de dicho organismo números 17.734/51, 18.917/51, 20.476/52 y 21.721/52, todas ellas relativas a la fijación del valor locativo de dicha propiedad y sus unidades; se fijó el valor locativo de estas últimas, a regir con carácter retroactivo a la fecha de iniciación de la locación; y se ordenó instruir sumario

a los señores Nicanor Ramón Basilio Vidal Roca, Osvaldo J. Nusdeo y Francisco Antonio González, sin perjuicio de hacerlo también respecto de los demás integrantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Gran Rex" en el supuesto de que hubiera mérito para ello. Por Resolución 28.403/53 se mantuvo en todas sus partes la antedicha Resolución 26.126/53; Que en las resoluciones recurridas la Cámara de Alquileres ha ejercido las atribuciones que entonces le confería el artículo 42, inciso d) de la Ley de Locaciones número 13.581 para establecer la verdadera naturaleza de los contratos llevados a su conocimiento, siempre que no hubiera contienda judicial previa; como así también las del inciso b) del mismo artículo, que la autorizaba para fijar valores locativos en casos como el presente; Que conforme al criterio sentado por Decreto Nº 14.001/56 — y hasta que se dictó el Decreto Nº 9.981/57 — cabía admitir los recursos jerárquicos deducidos contra las resoluciones de la Cámara de Alquileres cuando el pronunciamiento de ésta, impugnado, resolviera una cuestión jurídica. En cuanto al caso a examen, cabe tener en cuenta que el recurso fué interpuesto y tuvo trámite en fecha anterior a las de sanción y promulgación de la Ley 14.356, cuyo artículo 7º abrió la vía judicial para apelar de las resoluciones dictadas por las Cámaras de Alquileres en los casos de los incisos a) y d) del artículo 42 de la Ley Nº 13.581; habiendo sido presentado tempestivamente y no adoleciendo de vicios de orden formal que obsten a su admisibilidad; Que por Decreto-Ley Nº 2.186/57 se suprimió la competencia de la Cámara de Alquileres para entender en las materias de que trata el artículo 42 pre-citado, al derogarse a partir del 1º de marzo del año 1957 la referida Ley Nº 13.581, sus complementarias y modificatorias; Que, además, por imperio de las disposiciones del artículo 34 de dicho Decreto-Ley 2.186/57 y a partir de la fecha de vigencia de éste, dicho organismo carece ya de competencia para seguir entendiendo en las actuaciones en trámite, iniciadas con anterioridad al 28 de febrero de 1957, que se refieren a las materias del artículo 42 de la Ley 13.581; Que, en cuanto al problema de si el Poder Ejecutivo conserva competencia para resolver en esos casos, no obstante la caducidad de la jurisdicción administrativa para aplicar las disposiciones del artículo 42, que era propia de las Cámaras de Alquileres, cabe concluir, frente al silencio de la ley y por aplicación de los principios generales que rigen en la materia, que se ha extinguido también la competencia del superior jerárquico para entender por vía de apelación o de recurso en dichos casos; Que, en consecuencia, y atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda de la Nación, procede declarar la incompetencia del Poder Ejecutivo para entender en el caso a examen y por consiguiente para confirmar, modificar o revocar las resoluciones objeto de recurso; Por tanto, El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1º — Declárase que actualmente el Poder Ejecutivo Nacional carece de potestad para entender en el caso a examen y por consiguiente para confirmar, modificar o revocar las resoluciones de la Cámara de Alquileres, a sus efectos.

Art. 2º — Publíquese, comuníquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Cámara de Alquileres, a sus efectos.

Art. 8º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Educación y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, anótese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDISI. — Luis R. Mac Kay. — Carlos A. Florit.

Se Hará un Estudio Comparativo de la Acción Estatal de Fomento Minero en Varios Países

DECRETO Nº 3.027. — Bs. As., 29/7/58.

VISTO el expediente Nº 130.761/58 M.C.I. en el cual la Secretaría de Industria y Minería solicita autorización para comisionar al doctor Alberto Lapidus (C. 1919 - M. I. 2.712.522 - D. M. 42) de la Dirección Nacional de Geología y Minería de su dependencia, para que conjuntamente con el personal que designe la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, efectúe "in situ" el estudio comparativo de la acción estatal de fomento minero en las Repúblicas de Chile, Bolivia y Perú y las sugerencias aplicables a la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, Punto III del convenio firmado en fecha 31 de octubre de 1957 entre la ex Dirección Nacional de Minería y la Universidad Nacional de Cuyo, y CONSIDERANDO: Que el estudio comparativo de la acción estatal de fomento minero en los mencionados países, abarcará la organización y funcionamiento de la Caja de Crédito Minero de Chile, del Banco Minero de Bolivia y del Banco Minero del Perú, con los efectos que esos organismos tienen sobre el desarrollo de la pequeña, mediana y gran minería, así como el funcionamiento de las agencias de compras de minerales y de las plantas de concentración; Que dicho estudio representará un valioso aporte al conocimiento integral, por parte del Estado, de los antecedentes y medidas tomadas por esos países para el progreso de la industria minera; Que el mismo permitirá la obtención de los elementos de juicio necesarios para el planeamiento de una acción orgánica en el desarrollo de la minería nacional; Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Industria y Minería, El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1º — Autorízase a la Secretaría de Industria y Minería para comisionar al doctor Alberto Lapidus (C. 1919 - M. I. 2.712.522 - D. M. 42), de la Dirección Nacional de Geología y Minería de su dependencia, para que conjuntamente con el personal designado por la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, efectúe

"in situ" el estudio comparativo de la acción estatal de fomento minero en las Repúblicas de Chile, Bolivia y Perú y las sugerencias aplicables en la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, Punto III del convenio firmado en fecha 31 de octubre de 1957 entre la ex Dirección Nacional de Minería y la Universidad Nacional de Cuyo.

Art. 2º — La citada comisión tendrá una duración aproximada de setenta y cinco (75) días, debiendo presentar el citado técnico un informe sobre el desempeño de su cometido, dentro de los treinta (30) días de su regreso.

Art. 3º — Asígnase al mencionado técnico los viáticos reglamentarios incrementados con el coeficiente respectivo, en pesos moneda nacional, teniendo en cuenta que la misión, permanecerá un máximo de veinticinco (25) días en cada uno de los países mencionados.

Art. 4º — Los gastos generales, como así también los correspondientes a pasajes y movilidad menor, serán atendidos directamente por la Facultad de Ingeniería y Ciencia Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, de conformidad con lo convenido oportunamente por dicha Casa de Altos Estudios con la ex Dirección Nacional de Minería.

Art. 5º — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto, será atendido con cargo a la siguiente imputación: 2 — 1 — 27 — 9 — 125 — 0 — 7 — 33 — 12:0 — 14:0 — 296, del Presupuesto para el Ejercicio Financiero 1957/1958.

Art. 6º — Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se expedirá el pasaporte correspondiente.

Art. 7º — El presente decreto será firmado por el señor Secretario de Estado de Industria y Minería y refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, a sus efectos, vuelva a la Secretaría de Industria y Minería.

FRONDISI. — Emilio Donato del Carril. — Carlos A. Florit. — Alberto V. Tedín.

Concurrirá al V Congreso Internacional de Derecho Comparado a Realizarse en Bruselas (Bélgica) un Delegado Argentino

DECRETO Nº 2.907. — Bs. As., 25/7/58.

VISTO: El expediente Nº 103.041/58 del registro del Ministerio de Educación y Justicia, en el que obra la presentación efectuada por las autoridades de la Academia Internacional de Derecho Comparado comunicando a este Poder Ejecutivo la celebración de su próximo Congreso a celebrarse en la ciudad de Bruselas (Bélgica), desde el 4 hasta el 9 de agosto del corriente año, con motivo de la Exposición Universal que se realiza en dicha ciudad, bajo el patrocinio de S. M. el Rey de los Belgas; Que el Poder Ejecutivo ha sido asimismo informado de la designación del doctor Enrique R. Aftalión, quien en razón de su competencia en la materia ha sido designado el Relator Argentino en el tema "Las Sanciones en Derecho Penal Económico"; Que atento la alta distinción que tal designación comporta para la ciencia penal argentina y en homenaje a los elevados fines de cultura y acercamiento intelectual a que propende el Congreso a celebrarse, corresponde prestar al mismo el auspicio de este Gobierno; Que por su parte, el Ministerio de Educación y Justicia estima conveniente propiciar la concurrencia del Dr. Aftalión, teniendo en cuenta que su personalidad goza de merecido prestigio en los círculos docentes y universitarios de Europa; Que el precitado Departamento considera oportuno aprovechar la circunstancia para encomendarle al mismo, la redacción de un informe completo sobre lo tratado en el Congreso y las conclusiones a que se arribe, teniendo en cuenta que en él se han de considerar problemas de singular interés para los estudiosos de la especialidad; Por ello y atento lo aconsejado por el señor Ministro Secretario de Educación y Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º — Auspiciase oficialmente la concurrencia del doctor Enrique Roberto Aftalión (C. 1908, D. M. 1, Matrícula 199.147, Cédula de Identidad 747.954 de la Policía de la Capital Federal) al Quinto Congreso Internacional de Derecho Comparado que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) desde el 4 hasta el 9 de agosto del corriente año y en el que éste actuará como Relator Argentino en el tema "Las Sanciones en Derecho Penal Económico".

Art. 2º — Encomiéndase al Dr. Enrique Roberto Aftalión la misión oficial honoraria de participar en el Congreso citado en el artículo 1º en representación del Ministerio de Educación y Justicia, debiendo presentar a su regreso al país, dentro de un término improrrogable de treinta (30) días al citado Departamento, un informe completo sobre el desarrollo del mismo, conclusiones a que se hubiere arribado, experiencias recogidas en las instituciones docentes y universitarias que visitare y estudios, investigaciones y observaciones que hubiere realizado.

Art. 3º — Asígnase al doctor Enrique Roberto Aftalión la suma de doce mil pesos moneda nacional (m\$N. 12.000) en concepto de compensación por todo gasto, con cargo de rendir cuenta.



